

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos devastadores en la comunidad de pequeñas empresas. Muchos negocios están sufriendo y como resultado los contratos del gobierno son aún más importantes para las pequeñas empresas que padecen de reservas de efectivo limitadas y tienen menor acceso al capital. El fracaso de entidades gubernamentales a todos niveles de asegurar que las empresas de propiedad minoritaria reciban una cuota justa de contratos gubernamentales ha dado lugar a una situación en la que los negocios MBE son peor financiados.

LA SITUACION ACTUAL

El reto principal de programas de contratación de minorías, como el Business Enterprise Program (BEP) y el Disadvantaged Business Enterprise Program (DBE), es de ayudar a negocios de propiedad minoritaria a obtener contratos gubernamentales. El programa BEP se enfoca en pequeñas empresas de propiedad minoritaria y de propiedad feminil que participan en el proceso de adquisición de contratos del estado como contratistas principales y como subcontratistas. El reto del BEP es otorgar el 11% de todos los contratos a empresas de propiedad minoritaria. El reto del programa DBE es de incrementar el número de contratos otorgados a negocios pequeños de propiedad minoritaria o en posesión de grupos desfavorecidos.

Illinois ha fallado a los negocios de propiedad minoritaria a través de su mala implementación de los programas BEP y DBE. De hecho, el gobierno sigue faltando los objetivos del programa. Con respecto al programa DBE, el informe del 2018 del Departamento de Transportación de los EEUU constata que el Illinois está clasificado 47o de todos los estados y el Distrito de Columbia en materia de la consecución de sus metas de contratación minoritaria.

La legislación que establece los programas DBE/BEP está llena de resquicios legales y de retos no ejecutables. Los retos de contratación de grupos minoritarios se pueden renunciar si la agencia o el contratista hace un “esfuerzo de buena fe” para encontrar a negocios de propiedad minoritaria certificados. Estas renunciaciones se deben reformar. El proceso de certificación es muy complicado, particularmente para empresarios sin los recursos necesarios para enfrentar esta legislación complicada con muchos requisitos. Hay una carencia de transparencia y descuido inadecuado. Los objetivos numéricos no se cumplen y como resultados las comunidades minoritarias no reciben la cuota justa de contratos gubernamentales.

RECOMENDACIONES

- Asegurar que los objetivos de contratación de minorías se complementan con un requisito de que se adjudique un porcentaje adecuado de contratos gubernamentales a empresas de comunidades económicamente desfavorecidas con una prioridad en las comunidades minoritarias
- Racionalizar la aplicación de contratación de minorías y cambiar el proceso para hacer que sea más fácil de navegar
- Reformar el “good faith effort” waiver
- Mejorar y aumentar la transparencia de los procesos de contratación de minorías en Illinois. Exigir informes públicos anuales sobre los éxitos y fracasos del programa.
- Facilitar la colaboración y cooperación entre el gobierno, los contratistas y los subcontratistas para garantizar que los contratistas minoritarios puedan competir y obtener contratos gubernamentales